

# **Cuarenta años de democracia. Trabajo, trabajadores y sus organizaciones. De Saúl Ubal dini a los movimientos sociales**

**ENRIQUE MASES**

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades  
y Ciencias Sociales (CONICET, UNCOMA).

## **ESTUDIOS SOCIALES**

[Número especial • 2023]  
Voces plurales para pensar la  
democracia argentina (1983–2023)

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral  
Universidad Nacional del Litoral, Argentina  
ISSNe: 2250-6950  
estudiossociales@unl.edu.ar  
DOI: 10.14409/es.2023.64.e0067

Esta obra está bajo una Licencia Creative  
Commons Atribución- NoComercial-  
CompartirIgual 4.0 Internacional.



## **INTRODUCCIÓN**

Vistas en forma retrospectiva, las cuatro décadas que han pasado desde la vuelta de la democracia muestran profundos cambios de escenarios a lo largo de su derrotero respecto del mundo del trabajo, como en el de los trabajadores y las organizaciones que los representan. Modificaciones en la organización del trabajo, y por ende en las condiciones laborales de los trabajadores en relación de dependencia que a su vez se ven inmersos, por los vaivenes económicos, en un proceso de pauperización de sus salarios.

Pero no son los únicos que sufren este deterioro; los acompañan los cuentapropistas, los llamados monotributistas, el amplio mundo de los trabajadores de la economía popular y los desocupados. La mayor parte de ellos intentan ser representados por organizaciones gremiales que también sufren la fragmentación y pérdida de poder, particularmente quienes forman parte del sindicalismo tradicional cuando no, de la competencia de otras formas de representación.

A partir de estas consideraciones previas, el presente trabajo pretende hacer un recorrido por el devenir, en estos cuarenta años de democracia, del mundo del trabajo, de los trabajadores y de sus organizaciones observando los cambios que se produjeron y las consecuencias que los mismos provocaron.

## EL DEVENIR

Debemos situar el abordaje sobre la temática que abarca al trabajo, los trabajadores y sus organizaciones representativas en un momento anterior a la restauración democrática, cuando los cambios producidos en los años previos en el mundo del trabajo y en el accionar del movimiento obrero tuvieron su punto culminante en lo sucedido el 30 de marzo de 1982 con la huelga y movilización que llevo adelante la CGT Brasil y su líder Saúl Ubaldini contra el gobierno militar del General Bignone. Bajo la consigna *La patria convoca al pueblo* se movilizaron miles de trabajadores en distintos puntos del país. Esa jornada terminó con cientos de detenidos, dos militantes muertos, y los dirigentes de la central obrera detenidos y acusados de graves delitos. No obstante la represión sufrida, esta manifestación fue considerada como uno de los hechos que marcaron el comienzo del fin de la dictadura.

Esta centralidad del movimiento obrero organizado, articulada ahora por una CGT unificada que encabezaba el conflicto social, se mantuvo durante los primeros años de democracia respondiendo con una serie de movilizaciones, huelgas sectoriales y paros generales a la política económica y sindical del gobierno de Raúl Alfonsín.

La reducción del salario real en un contexto de fuerte inflación, el aumento de la desocupación y subocupación

así como del trabajo no registrado, sumado al intento del gobierno radical de reorganización del sistema sindical a través de un proyecto de ley conocido como ley Mucci, fueron los motivos que impulsaron un grave conflicto social que prefiguró un escenario que se mantuvo durante la mayor parte del gobierno alfonsinista.

Sin embargo, a pesar de este rol protagónico que ejerció el movimiento obrero organizado durante la última etapa de la dictadura y el primer gobierno democrático, constituido en un factor de presión y negociación, su centralidad se fue esfumando rápidamente en los gobiernos siguientes, y tuvo que aceptar la agenda que le fueron marcando las sucesivas administraciones nacionales.

Esto sucedió porque ese rol protagónico se vio enfrentado a un contexto caracterizado por una profunda crisis en la que se sumergió el propio mundo del trabajo. Durante la década del 90, sufrió una verdadera debacle en términos de centralidad, en el desenvolvimiento de la sociedad.

Esta crisis no fue privativa de la Argentina; tuvo sus coletazos, también, en los países industrializados, debido a los cambios estructurales de la economía capitalista, iniciados como consecuencia de la crisis petrolera a mediados de la década de 1970. Estas mudanzas influyeron en el campo laboral y, más precisamente, en las formas de inserción de la estructura productiva al desarrollarse un proceso de des-proletarización y precarización del trabajo industrial, que implicó una reducción de la clase obrera industrial tradicional. A su vez, un proceso de terciarización del trabajo del sector servicios modificó la estructura laboral al aumentar significativamente la participación femenina (Suriano, 2006).

En este contexto, los sindicatos se debilitaron y perdieron en buena medida su capacidad de presión y negociación; esto los condujo a adoptar una actitud defensiva, respetar

los temas de discusión impuestos por la agenda neoliberal y, en muchos casos, participar y negociar en el orden impuesto por el capital y el mercado (Suriano, 2006).

En el caso de nuestro país, desde los comienzos de la dictadura cívico militar encabezada por el general Jorge R. Videla en 1976, con la aplicación sistemática de las políticas neoliberales, comenzó un proceso de desestructuración de la sociedad del trabajo que alcanzó un punto culminante a lo largo de la década menemista y se prolongó con el gobierno de la Alianza.

En efecto, la política de privatizaciones de empresas del Estado, el desguace de la infraestructura ferroviaria y naviera, la aparición del desempleo masivo, el aumento vertiginoso del trabajo no registrado, el avance del proceso de desindustrialización con la disminución constante del número de obreros industriales y el aumento de los trabajadores ocupados en servicios y comercio —a lo que se agrega la terciarización y el cuentapropismo—, llevaron a una transformación radical de la economía que a su vez modificó de manera significativa tanto a la sociedad como sus comportamientos.

Las consecuencias de estas mutaciones experimentadas por la sociedad argentina llevaron a que la seguridad socioeconómica, laboral y social se erosionaran paulatinamente. Al mayor desempleo y subempleo, que ya hemos señalado, se les suma la pérdida de la protección laboral, la rotación de puestos y de trabajo, mayores y más diversas funciones, recorte de beneficios, variabilidad y caída de las remuneraciones, descentralización de la negociación colectiva y mayor inseguridad básica, algunos de los elementos que conforman este nuevo contexto.

Ante esta realidad, la protesta social se vuelve una manifestación cotidiana en una sociedad en la que el aumento de la pobreza, la retirada del Estado como promotor y garante

del bienestar, la desarticulación de la sociedad del trabajo y la crisis de representación política se constituyen en características fundamentales de un nuevo orden. Nuevos actores sociales y políticos, nuevos repertorios de confrontación, nuevos espacios de sociabilidad, nuevos símbolos y ritos invaden el escenario.

En efecto, la nueva realidad socioeconómica nacional está caracterizada por una vida social en la cual los actores primeros no solo son los asalariados, sino —y principalmente— los desocupados, quienes aparecen a la cabeza de estas nuevas formas de protesta social, que comienza a tener un fuerte protagonismo en la segunda mitad de los años 90. Las primeras puebladas en las ciudades de Cutral Co, Tartagal y Mosconi, en los años 1996 y 1997, junto a la acción territorial y organizativa en el conurbano bonaerense, inauguran una forma de protesta social caracterizada por los cortes de ruta y por la presencia de un actor social, los piqueteros, caracterizados por una nueva modalidad organizativa, la asamblea, y por un nuevo tipo de demanda, el trabajo. Se origina de esta manera una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina (Svampa y Pereyra, 2003).

A diferencia del pasado —cuando los trabajadores con sus organizaciones gremiales encabezaban la protesta social a través de una serie de acciones que pasaban por la huelga y la movilización—, en los años 90 son otros los actores principales que intentan movilizar y modificar el escenario socioeconómico adverso. Ya no son los trabajadores y sus organizaciones, sino los excluidos quienes aparecen liderando en su mayoría las luchas sociales. Ya no son los trabajadores que se movilizan en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo o de salarios, sino que son los excluidos que tratan de incluirse en el modelo que los ha expulsado o, por el contrario, que intentan cambiar el modelo.

Mientras los trabajadores de ayer luchaban contra las diferentes formas de explotación, muchos de los excluidos en esta etapa se ven forzados a aceptar condiciones laborales opresivas en su afán por incluirse.

También se alteró significativamente el mercado de trabajo con una mayor participación de la mujer trabajadora, lo que implicó una mayor feminización de muchos puestos de trabajo. No obstante, los niveles de desocupación entre las mujeres siguieron siendo mayores que entre los hombres, al mismo tiempo que subsiste la desigualdad en términos salariales y en la escala de decisión en la mayoría de las profesiones.

Todas estas mudanzas sin lugar a dudas modificaron la preponderancia de las organizaciones gremiales. Los sindicatos pasaron a ser más débiles: su capacidad de movilización, de presión y de poder económico disminuyó y buena parte de sus acciones quedó concentrada en los gremios de servicios, afectados por la racionalidad estatal.

Consecuencia de esta crisis del mundo del trabajo fue la pérdida de centralidad de los trabajadores y de sus organizaciones representativas, que otrora no solo habían colaborado en construir una identidad política y social de los trabajadores, sino que también se habían convertido en un factor de presión y poder en la Argentina contemporánea.

De esta manera, ante los embates neoliberales, los trabajadores organizados expresaron cierta resistencia social en particular a partir del surgimiento de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que incluía tanto a gremios estatales como a diversos movimientos de base territorial. A estos se sumaba una fracción de la histórica Confederación General del Trabajo (CGT) que llevaba el nombre de Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y los gremios clasistas que actuaban por fuera de estas estructuras. Fueron estos agrupamientos gremiales los

que resistieron la ofensiva neoliberal de la década de 1990, mientras que el resto de la dirigencia cegetista adoptaba una posición pasiva cuando no de complacencia ante los gobiernos menemistas.

Esta resistencia prosiguió durante el gobierno de Fernando de la Rúa a partir de su política laboral que incluyó recorte de sueldos y jubilaciones estatales, y la sanción de la ley de reforma laboral en el marco de una crisis económica que llevó el índice de desempleo de un 15 % a un 25 %. La aceptación de esta nueva norma legal por parte de un sector de la CGT liderado por el secretario general Héctor Daer dio lugar a una nueva fractura de la central obrera, encabezada por Hugo Moyano y un grupo de sindicatos que se oponían férreamente a su implementación.

Los sucesos de diciembre de 2001 son las consecuencias finales de esta realidad que se abate sobre los trabajadores y sus organizaciones representativas. La intensa y casi inédita movilización popular que provocó la caída del gobierno de la Alianza y del presidente Fernando de la Rúa mostró aristas totalmente diferentes —incluidos actores y metodología— de las que aparecían dominando los formatos de la protesta social en el pasado.

La etapa siguiente, conformada por la administración de los gobiernos kirchneristas, orientó sus políticas hacia el retorno de las antiguas instituciones del mundo del trabajo, tales como las convenciones colectivas de trabajo, el salario vital y móvil, en una coyuntura caracterizada por el crecimiento de los ingresos y una drástica reducción del desempleo que pasa del 21 % en 2002 al 5,9 % en 2015. A esto se suma una serie de decretos que otorgan incrementos salariales a través de sumas fijas que benefician a los trabajadores registrados más empobrecidos.

Sin embargo, el aumento del trabajo no registrado también fue una constante durante este periodo. Si bien las



autoridades gubernamentales atacaron con diversas medidas esta anomalía, anomalía, al final de la década kirchnerista, uno de cada tres asalariados no se encontraba en la formalidad.

En cuanto a la representación de los trabajadores, la salida de la crisis de 2001 institucionaliza lo que de manera acertada Paula Abal Medina (2016) define como la existencia de los dos movimientos obreros. Uno, el tradicional, comandado por una dirigencia sindical peronista que, a favor de las mejoras obtenidas a partir de la ampliación de su representatividad, dado el incremento del empleo registrado y las altas tasas de afiliación, se convierte —como antaño— en una de las principales herramientas organizativas y de representación de los trabajadores formales. Así fortalecidas sus estructuras, logra convertirse en un actor central para contrarrestar el peso de los empresarios interviniendo en las pujas distributivas.

Sin embargo, a fines de la primera década del nuevo siglo este sindicalismo tradicional empieza a dar muestra de agotamiento y por ende se estrechan los límites de sus accionar, tanto por la coyuntura económica como por los progresivos desacuerdos con el gobierno nacional. De tal manera que en vísperas del fin de la era kirchnerista ya se verificaba una retracción del poder de intervención y negociación que estas organizaciones peronistas habían ostentado durante los primeros años.

Junto a este sindicalismo de raíz peronista, aparece otro sindicalismo vinculado de manera fuerte con las ideas de izquierdas, que expresa una identidad gremial que reivindica una tradición sindical antiburocrática y clasista, en la conformación de comisiones internas de algunos gremios y en el control de sindicatos de base.

El otro movimiento obrero está constituido por los trabajadores de la economía popular que deviene de la

confluencia del trabajo informal y la lucha por el acceso a los diversos planes sociales que ponen en marcha los gobiernos peronistas. De esta manera, aquellos grupos piqueteros que en forma poco orgánica interactuaban durante la década anterior ahora —sostenidos por los programas estatales— se consolidan y se organizan en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), o en otros colectivos de diferentes signos políticos, logrando con su capacidad de movilización hacer efectivos algunos de sus reclamos.

Naturalmente, la coexistencia de estas dos grandes agrupaciones en las que se nuclean los trabajadores marca, por un lado, una línea de fractura dentro del mundo del trabajo y de los trabajadores y, por otro, los límites de las transformaciones sociales intentada por los gobiernos kirchneristas.

La llegada al gobierno de la alianza electoral Cambiemos marca escenario donde de nuevo disminuye la calidad de vida de los trabajadores a favor de una serie de medidas que tiene por objetivo principal la baja del costo laboral, ya sea a través del salario directo como, en una reducción de impuestos que financian el sistema de seguridad social. Esta situación se profundizó durante la última etapa del gobierno de Juntos por el Cambio cuando, a partir de la crisis de la deuda, se sucedieron dos devaluaciones que conllevaron una caída del empleo asalariado registrado en la seguridad social y, en particular, el vinculado a la industria, sobre todo aquellas ligadas al mercado interno, porque esa rama de actividad fue el centro de la crisis en el mercado de trabajo. Esto redundó en una disminución de los asalariados formales en la estructura de clases que pasó de un 24 % del total a un 18 %. Al mismo tiempo, creció el cuentapropismo y el empleo no calificado.

Ante este panorama, las respuestas de las organizaciones representativas de los trabajadores fueron bastante disímiles y se caracterizaron por lo que Esteban Iglesias

(2018) señala como la negociación y el diálogo crítico que, a partir de un fuerte pragmatismo, llevan adelante los gremios más numerosos enrolados en la CGT. Esto se verifica en la aceptación de medidas flexibilizadoras en la organización del trabajo en la actividad petrolera —por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera—, en la actividad automotriz por parte del SMATA y también en los empleados públicos nacionales representados por UPCN. Un segundo espacio está dado por la conformación de un frente sindical integrado por un sector de la CGT —la denominada Corriente Federal— y las dos CTA, a los que se sumaron los movimientos sociales como la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita. Esta unidad en la acción trajo como novedad la articulación política entre organizaciones que representan trabajadores registrados y no registrados, fundada en la realidad que, más allá de la condición laboral de cada uno, a ambos los alcanza la pobreza. Los trabajadores de este nuevo agrupamiento se movilizaron a lo largo del periodo, confrontando contra estas políticas y teniendo su punto culminante en la organización de una gran marcha federal en contra de una posible reforma laboral.

Junto a estos espacios se articulan quienes adhieren políticamente al gobierno de Mauricio Macri, en particular la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), a partir de su brazo político, el Partido Fe. En tanto que en el otro extremo se ubican quienes se oponen de manera formal, como los movimientos piqueteros vinculados a los partidos de izquierda como el Polo Obrero, y los que provienen de una tradición clasista pero que se definen como autónomos del Estado, y los partidos políticos como la Coordinadora Aníbal Verón o el Frente Darío Santillán (entre otras).

La vuelta al gobierno del peronismo en 2019 se da en el marco de una profunda crisis económica, aceitada por una significativa deuda externa. A ella se suma la llegada de la pandemia de Covid 19, lo que trajo significativas consecuencias que alteraron la organización del trabajo.

Por otro lado, la crisis derivada de esta pandemia afectó el empleo informal, vinculado a la porción del trabajo precarizado y no calificado, así como a los sectores autónomos y cuentapropistas. La pérdida de empleo y disminución de sus ingresos fueron la consecuencia inmediata, cuestión que no se verificó en los trabajadores registrados gracias a la ayuda del Estado a sus empleadores.

A pesar de las tensiones internacionales, la economía argentina se repuso y en el tiempo siguiente mostró algunos indicadores alentadores como el crecimiento de la ocupación, del trabajo registrado, del empleo asalariado privado formal y, dentro de este, el referido a la actividad industria

Sin embargo, esta mejora no pudo ser aprovechada por los trabajadores; respecto de los registrados, sus salarios se vieron licuados por una inflación cada vez más acelerada, lo que afectó también al resto de los trabajadores informales. De ese modo, amplias franjas de ambos grupos pasaron a engrosar las filas de los pobres e indigentes.

Ante este escenario las organizaciones que representan a los trabajadores tuvieron actitudes diferentes. Mientras las que abrevan en el peronismo —como algunos movimientos sociales, la CGT y ambas CTA— fueron pasando de un apoyo irrestricto al gobierno peronista —por lo menos hasta 2021—, a concretar la primera huelga con movilización contra la «inflación» que licuaba el poder adquisitivo de los salarios en 2022, lo que significó un alejamiento de aquel apoyo inicial. Esa gran concentración de trabajadores, convocada por la CGT, albergó dos movilizaciones diferentes: una organizada y copada por las centrales obreras que tenían como

blanco de sus críticas a los empresarios, especuladores formadores de precios, y otra protagonizada por las organizaciones sociales que, si bien se sumaron al enorme despliegue de las centrales obreras, plantearon sus propias reivindicaciones exigiendo al gobierno que no se olvide de los sectores populares.

Al mismo tiempo se profundizaron las diferencias dentro de la propia CGT, lo que acentuó la fragmentación y la pérdida de poder de la central obrera como factor de presión.

En cambio, los que sí mantuvieron una actitud de enfrentamiento permanente con el gobierno peronista fueron los movimientos sociales de la izquierda partidaria o de tradición clasista con movilizaciones y acampes contra el recorte de las ayudas sociales y por el acceso a un *empleo digno*.

En definitiva, los últimos ocho años que completan el periodo estudiado, y más allá de los diferentes signos políticos de los gobiernos de turno, marcan la profundización de una sociedad dual, donde una parte minoritaria accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve muy reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas. Durante la gestión del gobierno del Mauricio Macri la participación de los asalariados se redujo del 51.8 % en 2016 al 46,2 % en 2019. Esta situación se agravó para los trabajadores durante el gobierno de Alberto Fernández ya que el porcentaje descendió a 43.9 % en los tres primeros trimestres de 2022 (Basualdo y Manzanelli, 2022).

## **ALGUNAS REFLEXIONES FINALES**

Sin lugar a duda a lo largo de estos cuarenta años el trabajo ha sufrido significativas mutaciones propias de los vaivenes de la economía, de la propia organización del trabajo y de los cambios tecnológicos, fundamentalmente por

la introducción de avances en la tecnología digital. Esto redundará en un fenómeno nuevo que, entre otras peculiaridades, plantea en muchos casos el pasaje del trabajo asalariado clásico al trabajo autónomo, lo que a su vez pone en tensión no solo el marco regulatorio sino además el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores que en su momento fueron pensadas para la economía tradicional.

De la misma manera, el trabajador también ha debido modificar su condición adaptándose a las nuevas realidades laborales. Se ha fragmentado fuertemente el mundo del trabajo y de los trabajadores, y aquel actor principal en la etapa del estado de bienestar, que estaba incluido dentro del trabajo registrado a tiempo completo y en la cual permanecía a lo largo de su vida activa, hoy constituye solo una parte del universo laboral. En la actualidad comparte ese espacio con otros trabajadores, tales como emprendedores, cuentapropistas y aquellos que forman parte de la economía popular en la que desarrollan, desde la informalidad, múltiples tareas y oficios.

Lo analizado hasta aquí refleja, en primer lugar, una mayor heterogeneidad del mundo laboral ya de por sí fragmentado, lo que trae como consecuencia de esta tendencia una reafirmación de los límites del sindicalismo clásico para contener, expresar y conducir esta heterogeneidad. Al mismo tiempo, esta fragmentación conlleva una precarización del mundo del trabajo lo que debilita el poder de negociación de las organizaciones que representan a los trabajadores.

En definitiva, las profundas mutaciones del mundo del trabajo, sumadas a la fragmentación y debilidad de las organizaciones que representan a los trabajadores para garantizar los derechos a sus representados ante los nuevos desafíos, hacen que los trabajadores transiten un camino de

incertidumbre y de desasosiego por el presente que les toca vivir y el futuro por venir.

En medio de esta confusión, una cosa está clara y es que la clase trabajadora, tanto la que está registrada como la que forma parte de la informalidad, no va camino al paraíso, por el contrario, está cada vez más cerca del infierno.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**ABAL MEDINA, PAULA (2016).** Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas. *Nueva Sociedad*. N° 264, julio–agosto.

**BASUALDO, EDUARDO Y MANZANELLI, PABLO (2022).** Los sectores dominantes en la Argentina: estrategias de construcción de poder, desde el siglo XX hasta el presente. Siglo XXI Editores Argentina.

**IGLESIAS, ESTEBAN (2018).** Organizaciones sindicales y movimientos sociales del mundo del trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri (Argentina 2015–2017). *Gaceta Laboral*, Vol. 24, No. 3, Universidad del Zulia (LUZ).

**SURIANO, JUAN (2006).** Los dilemas actuales de la historia de los trabajadores. En Gelman, Juan (coord.). *La historia económica argentina en la encrucijada: balance y perspectiva*. Prometeo.

**SVAMPA, MARISTELLA Y PEREYRA, SEBASTIÁN (2003).** Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras. Biblos.